

**PRODUCE INFORME ARTICULO 8 LEY 16.986 - PLANTEA CASO
FEDERAL - PETICIONA.**

Señor Juez:

MARIA LEANDRA CRAVERO, abogada, T° 500, F° 358, en representación del **ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA**, constituyendo el domicilio a los efectos procesales en la calle Figueroa Alcorta Nro. 163, 6to. Piso de esta Ciudad de Córdoba, domicilio electrónico bajo el número: 27-23461342-7 en los autos caratulados: **"CRUZ SILVIA MARCELA Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN S/ AMPARO AMBIENTAL"**, Expediente N° **FCB 21076/2016**, ante V.S. como mejor proceda digo:

I.- PERSONERIA

Que conforme lo acredito con la copia de la Resolución N° 60, de cuya autenticidad y vigencia doy fe bajo juramento de ley, he sido designada como representante en juicio del **ESTADO NACIONAL - -MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA** y en tal carácter me presento en

estos autos, solicitando se me confiera la correspondiente "legitimatio ad processum".

II. OBJETO.

En legal tiempo y forma, en cumplimiento de expresas y precisas instrucciones impartidas por mi mandante vengo a evacuar el informe requerido por V.S. mediante oficio judicial recibido en sede de mi mandante día 3 de noviembre del corriente, relacionado con las circunstancias de hecho y de derecho que se invocan en el escrito de inicio.

El plazo otorgado para evacuar el solicitado informe fue prorrogado por V.S. en fecha 10.11.2016.

Por los argumentos que expondré y/o por aquellos que el elevado criterio de V.S. entienda que correspondan, solicito el rechazo de la acción de amparo incoada.

Asimismo, introduzco el planteo del Caso Federal para ocurrir, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del artículo 14 de la Ley N° 48, articulando el recurso extraordinario federal.

**III. LA PRETENSIÓN AMPARISTA. NATURALEZA DEL INFORME
DEL ART. 8 LEY 16.986. NEGATIVAS.**

1. LA PRETENSIÓN AMPARISTA.

Se presentan en autos Silvia Marcela Cruz; Cristian Damián Sánchez, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad Luciano Nicolás Sánchez; Florencia Belén Sánchez; Franco Damián Sánchez; Pablo Gastón Sánchez; María Gabriela Aguilar y Santiago Alfredo Palermo, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad Vicente y Gregorio Palermo Aguilar; Natalia Aguilar, por derecho propio y en representación de sus hijas menores de edad, Emilia y Ana Mazzini Aguilar; Eugenia Ferreira Centeno, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad Lucia Jordana Infante; María Celeste Novarece, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad Kala Bruccieri Novarece; Marta Inés Maldonado; María Alejandra Maldonado, por derecho propio y en representación de sus hijas menores de edad Milagros Griselda y María del Pilar Villaruel; Mariel Carolina Castagno, Gustavo Federico Abbona Gimenez, por derecho propio y en representación de

sus hijos menores Lorenzo, Eugenio y Camilo Abbona Castagno; Mariana Tosolini; Rubén Romero por derecho propio y en representación de sus hijos menores Victoria y Lucia Romero; María Julieta Cabo; Luis Raúl Molina; Nora Rosa Acuña; Carmen A. Medina; María Rosa Viñolo, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad Victoria Velez; María Belén De Rosa; Jorge Luis Molina; Mirta Mercedes Caon; Eusebio del Tránsito Cabanay.

Refieren que todos lo hacen por derecho propio, y que resultan ser vecinos y miembros de la Asamblea Ciudadana "Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano - VUDAS".

Manifiestan que la presentación se realiza en los términos de los artículos 41, 43 y 116 de la Constitución Nacional; Artículo 30 de la Ley 25.675, y que se trata de una acción colectiva de daño ambiental.

Como quedará demostrado a continuación, no logran acreditar la supuesta falta de "*habilitación legal*" de la Planta de Porta Hermanos Sociedad Anónima, en cuya virtud

pretenden lograr la *"clausura y cierre definitivo"* de la misma.

Para ello, exponen que se ha generado un daño ambiental, y solicitan hacer *"cesar la contaminación ambiental atmosférica"*.

Allí surge una primera contradicción en el objeto de la pretensión , por una lado hacer cesar el supuesto daño ambiental y por otro el cierre definitivo de la planta.

Como se verá, no prueban la inminencia del daño, como tampoco la producción de daño alguno. Menos aún la supuesta responsabilidad del Estado, por la omisión alegada.

El análisis de la cuestión debatida en autos, excede el marco de esta acción, correspondiendo a otro tipo de remedio judicial como sería el "proceso de conocimiento", ya que, para analizar correctamente la pretensión de la accionante, se requiere que se efectúe en el marco de un mayor debate y prueba. Del mismo modo se requiere mayor amplitud probatoria para determinar la existencia del supuesto perjuicio que se denuncia y/o el supuesto

incumplimiento omisivo de mi mandante. Elementos esenciales al marco de la vía excepcionalísima intentada.

Por ello, es que esta parte solicita el rechazo de la presente acción por considerarla improcedente, como se desarrollará a continuación.

Como liminar, cabe señalar que resulta por demás inadecuada la pretensión de la contraria, al menos tal como está planteada.

Asimismo, y en otro orden puede adelantarse que - reitero - tal como la parte demandante presenta sus pretensiones, la vía excepcionalísima del amparo es improcedente por la falta de cumplimiento de los requisitos formales de la acción.

Es decir que en un doble aspecto a criterio de mi parte resulta improcedente la acción intentada.

2. NATURALEZA DEL INFORME DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 16.986.

Conforme surge de los artículos 6, 9, 10, 14, 15 y concordantes de la Ley N° 16.986, el procedimiento a seguirse es contradictorio y específicamente bilateral en

los términos y modalidades previstas por la ley regulatoria.

Por ello, la doctrina es conteste en afirmar que la naturaleza bilateral del amparo, como su objetivo específico lleva a concluir que el informe circunstanciado que prescribe el artículo 8° constituye un medio informativo, y a la vez un verdadero responde de demanda: simultáneamente un *informe -noticia y un informe - réplica*.

A la luz de tales premisas se contesta el presente informe.

3. NEGATIVAS.

Por imperativo procesal, niego de manera genérica, todo aquello que no sea objeto de un reconocimiento expreso en el presente responde y específicamente niego:

-Que la acción de amparo en trato sea procedente.

-Que estén cumplidos los requisitos de admisibilidad que prevé el art. 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986.

-Que se encuentre vulnerada disposición alguna prevista en las leyes 26.093 y 25.675.

-Que exista una lesión arbitraria e ilegal de los derechos y garantías constitucionales, producida por acción u omisión de mi parte.

-Que del planteo de la actora surja algún tipo de responsabilidad del Estado Nacional. A todo evento, niego que la misma responda a una omisión estatal.

-Que el Estado Nacional, antes de ahora, hubiera tomado conocimiento fehaciente de la existencia del supuesto daño ambiental que se denuncia en autos.

-Que le corresponda al Estado Nacional el control y fiscalización en materia ambiental, en el caso que aquí se plantea.

-Que exista obligación legal de mi mandante de otorgar la habilitación a la planta perteneciente a Porta Hermanos S.A.

-Que a raíz de la actividad de la planta de Porta S.A. se contamine el aire y el ambiente en general, por no constarme.

-Que se hubieran causado daños a la salud de los actores o sus familiares.

-Que se hubiera dañado el medio ambiente.

-Que exista contaminación ambiental.

-Que se hubieran causado daños irreparables.

-Que actividad u omisión alguna de mi mandante ponga o haya puesto en riesgo la salud o vida de los vecinos de la zona sur o de ninguna otra.

- Que mi mandante, en el caso de autos, haya omitido el otorgamiento de la habilitación para funcionar de la planta en cuestión, así como la aprobación del EIA (Evolución de Impacto ambiental) ni la convocatoria a la audiencia pública, en el marco del procedimiento de EIA. Ello por cuanto no existe obligación legal que lo conminara a tales obligaciones.

-Que la sentencia que el actor pretende sea posible de ser dictada, sin alterar las competencias de los distintos niveles, municipal, provincial y nacional.

-Que la doctrina y jurisprudencia citada sea aplicable al caso de autos.

-Desconozco toda la documental acompañada en traslado y obrante en este expediente, por no constar su autenticidad.

-Asimismo, desconozco todas las citas sobre la página Web de Porta Hermanos S.A. y sobre notas periodísticas publicadas en medios de comunicación realizadas al Señor José Porta, o de personal de la empresa.

IV. RAZONES QUE TORNAN SUSTANCIALMENTE IMPROCEDENTE

LA ACCIÓN DE AMPARO.

1. LA REALIDAD DE LOS HECHOS. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN LEGAL DE OTORGAR "HABILITACIÓN LEGAL" POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

En su escrito de demanda, la contraria realiza un extenso relato que resulta confuso y carente de sustento fáctico y jurídico.

Como se anticipó, los vecinos accionantes, demandan al Estado Nacional por el supuesto incumplimiento de la firma PORTA HERMANOS S.A. (citada como tercera). Ello,

por considerar que existe una violación a lo dispuesto por la Ley 26.093.

En su escrito de demanda, manifiestan que lo que discuten es si la empresa Porta Hnos. S.A. tiene las habilitaciones nacionales para funcionar.

Luego de realizar una serie de citas periodísticas - sin ningún tipo de valor probatorio - sobre presuntos dichos del Señor José Porta, y citar informes que - según la contraria - corresponden a la web oficial de Porta Hermanos S.A., afirman que *"la nueva Planta de la Empresa Porta Hnos, es una **"Planta Productora de Bioetanol"** a partir del uso de maíz, como materia prima de origen agropecuario"*.

Alcanza esta breve reseña de los dichos de la actora, para demostrar, con la simple comparación con la normativa aplicable al caso, que los mismos son absolutamente erróneos y tendenciosos.

Como es sabido, la ley 26.093, dispone el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso sustentable de Biocombustibles.

El artículo 5° de la mencionada Ley, citado por los actores, establece claramente que la clasificación de biocombustibles se encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos por la autoridad de aplicación, textualmente dice: "**A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiesel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación.**" (El resaltado es ajeno al original).

En esa dirección, el Poder Ejecutivo Nacional, reglamentó la norma mencionada - a través del Decreto N° 109/2007, y decidió poner en cabeza de la Ex Secretaría de Energía (hoy Ministerio de Energía y Minería) el carácter de Autoridad de Aplicación, de un Régimen que tiene por objetivo la regulación del mercado de **los combustibles de uso automotor y no los que son utilizados para otro destino.**

De los "Considerandos" del Decreto N° 109/2007, se desprende con claridad que el objetivo de la norma se

refiere a la regulación de biocombustibles para uso automotor.

Veamos.

Considerando 2° del Decreto N° 109/2007: *"Que la diversificación de la oferta de combustibles constituye uno de los ejes de la política nacional en materia de combustibles."*

Considerando 3° del Decreto N° 109/2007: *"Que la incorporación de Biocombustibles a la matriz energética nacional tiene sustento en la necesidad de promover el uso de combustibles que comprometan en la menor medida posible el medio ambiente, en el marco de una política consistente con la aspiración plasmada en el Artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL."*

Destacamos que no se trata de una transcripción taxativa, sino meramente ilustrativa.

En efecto, resulta evidente que la Ley 26.093 ha tenido en miras la regulación de los biocombustibles que son utilizados como combustibles automotor y en ese marco mi mandante resulta Autoridad de Aplicación.

Por su parte, la Resolución de la entonces Secretaría de Energía N° 1295/2008, en su artículo 1°, determina las especificaciones de calidad que deberá cumplir el bioetanol, de conformidad con el Artículo 3° Inciso c) del Decreto N° 109/2007, y así circunscribe "el BIOETANOL comercializado en el marco de la Ley N° 26.093 para su mezcla con el combustible líquido caracterizado como Nafta".

No obstante, aunque pueda resultar una obviedad, es de importancia destacar que, tal como su nombre lo indica las competencias del "Ministerio de Energía y Minería" (antes "Secretaría de Energía"), se circunscriben a las cuestiones y/o actividades ligadas a la Energía y Minería. En ese orden de ideas, la intervención de este organismo en el marco de la Ley 26.093, solo puede encontrar sentido en el hecho de que sus productos son, por definición, de uso "combustible".

Conforme todo lo expuesto hasta aquí, y sin perjuicio de las consideraciones que se efectuaran *ut infra*, respecto de estos obrados, se desprende a todas luces, no sólo que la Ley 26.093 no ha tenido en miras

otra cosa que no haya sido la regulación de los biocombustibles que son utilizados como combustibles de uso automotor, como también que, como consecuencia de lo anterior, la necesidad de habilitación de las empresas que cuentan con instalaciones de elaboración de bioetanol por parte del Ministerio de Energía y Minería, queda supeditada a aquellas que elaboren dicho producto con destino combustible y no para otras actividades, por cuanto a los fines de delimitar puntualmente la situación de la empresa Porta Hermanos Sociedad Anónima - no demandada en autos, sino citada como tercero - en el contexto de todo lo antedicho, sólo restaría analizar las características de los productos que la empresa elabora frente a lo dispuesto por la mencionada Resolución SE N° 1295/2008, como así también el destino de venta y/o consumo que la empresa asigna a los mismos, para luego esbozar una conclusión categórica.

Nótese que los accionantes exponen que la continuidad de la empresa pone en riesgo su salud, por el riesgo de vida que *"entraña la producción y almacenamiento, en una zona densamente poblada de alcohol etílico..."*

Ello, es otra prueba más que ni la habilitación ni el control de la plata de Porta Hermanos S.A., le corresponde a mi mandante.

El Anexo I de la Resolución N° 5/2015 del Instituto Nacional de Vitivinicultura - autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Alcoholes 24.566 - contempla la clasificación y las especificaciones técnicas de los alcoholes, dentro de los cuales se han establecido, entre otras, las categorías de "Alcohol etílico anhidro" y "Alcohol etílico anhidro para biocombustibles". Distinción evidentemente desconocida por los vecinos actores.

Ello, en un análisis conjunto con la ya citada Resolución de la ex Secretaría de Energía N° 1.295/08, que contempla las especificaciones del bioetanol con destino a la mezcla obligatoria con las naftas a comercializarse en el mercado interno, no deja dudas, que el destino de los productos en cuestión deviene relevante, para el análisis de la pretensión actora.

En ese sentido, cabe destacar que el bioetanol de uso automotor - definido por la Resolución ex S.E.

1.295/08 - debe contar, tal como lo expresa la norma, con *benzoato de denatonio*, el cual es un desnaturalizante que le imprime características tales al producto - un fuerte sabor amargo - que hacen que este último no pueda ser utilizado para otro destino que no sea su uso como combustible, evitando así que pueda desviarse hacia otro mercado alternativo que no sea este.

Por todo lo expuesto, y amalgamando lo expresado en el párrafo anterior con los dichos de la parte actora a lo largo de toda su demanda, hace que no existan dudas en cuanto a que la empresa Porta Hnos. S.A. se dedica como actividad principal a la elaboración de etanol anhidro para usos medicinales, alimenticios, cosméticos e industriales, no cabe otra alternativa que arribar a la conclusión irrefutable: la actividad desarrollada por dicha firma no se encuentra bajo la órbita de control, ni mucho menos habilitación, de este MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, por no tratarse de productos combustibles para su uso en motores.

En síntesis, resulta improcedente la demanda incoada contra mi mandante Estado Nacional - Ministerio de Energía y Minería - en los términos del presente informe.

2. LA CUESTIÓN AMBIENTAL. COMPETENCIAS.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, se observa que los accionantes buscan crear la existencia de un daño ambiental y una supuesta responsabilidad del Estado Nacional, con la finalidad de que proceda su acción de amparo.

Sin embargo, sostienen enfáticamente en diversos pasajes de su demanda que lo que discuten es si Porta Hermanos S.A. tiene habilitaciones nacionales para funcionar (habilitación que no le corresponde otorgar al Estado Nacional, en los términos descriptos en el apartado que antecede).

Concretamente sostienen: *"por la presente **no se discute** el carácter "contaminante" de las actividades desarrolladas en la Planta de Bioetanol Porta HNOS, muy por el contrario, lo que aquí se discute es si, la*

Empresa tiene las habilitaciones nacionales para funcionar... ” (El resaltado me pertenece).

No obstante, no debe soslayarse, que en fecha 13.06.2016, el juez Ricardo Bustos Fierro (titular del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba), rechazó *in limine* la presente acción (magistrado que posteriormente fue recusado), sosteniendo que “no se advierte (...) acto u omisión de **la autoridad pública nacional, que en materia ambiental** ejerce un rol subsidiario a **los niveles de gobierno provincial y municipal como Autoridad de Aplicación**, los que ya se encontrarían interviniendo en lo que respecta a la habilitación respectiva. (...) la admisión de la presente acción podría resultar en una **desnaturalización de los tramites y procedimientos en los niveles de gobierno competentes** que estarían interviniendo, tanto la Municipalidad de Córdoba, como la Secretaría de ambiente de Provincia de Córdoba.” (lo remarcado me pertenece).

En ese contexto, reiteramos que la actora ha sostenido que su acción está destinada a “**demostrar la existencia o no de la correspondiente “habilitación**

previa", pese a solicitar, a lo largo de su demanda, el cese de la supuesta "contaminación atmosférica" y dedicar la mayoría de su demanda a exponer sobre la presunta existencia de la misma.

Exponen que sólo de manera subsidiaria manifiestan la cuestión ambiental, al solo efecto de la adopción de la medida peticionada (el cierre definitivo de la planta de Porta Hnos. S.A.).

Para ello, la contraria expone que el Estado Nacional, tiene un deber inexcusable en cuanto a la protección del ambiente en general y afirma que se encuentra *"verificada la obligación de la demandada"*.

Alega que existe una violación de la Ley General de Ambiente, Ley 25.675. Hace hincapié en la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Para endilgarle responsabilidad a mi mandante, ensaya una interpretación - errónea - de los artículos 31 y 41 la Constitución Nacional.

En esa dirección, debemos realizar una serie de consideraciones, tendientes a demostrar que la acción

entablada por los accionantes, contra mi mandante, no debe prosperar.

Los amparistas, al realizar el análisis del art. 41 de la Constitución Nacional, sobre las competencias delegadas de las provincias, lo vinculan a la supremacía de la Nación, sobre las Provincias y los Municipios.

Sin embargo, en autos no demandan a la Provincia de Córdoba ni al Municipio. Nada refieren respecto de su omisión de demandar al Municipio y a la Provincia involucrados. **Jurisdicciones que tienen la obligación legal respecto al trámite y otorgamiento del EIA.**

Sin embargo, en notoria contradicción con la responsabilidad que pretenden endilgarle a mi mandante, en el año 2014 realizaron una "Denuncia Administrativa" contra el gobierno municipal, cuestionando las autorizaciones ambientales municipales concedidas a favor de Porta Hermanos S.A.

Y luego, ante el silencio de la Administración Municipal, han entablado una "Acción de Legitimidad" también contra el Gobierno Municipal, de la que han

desistido voluntariamente (que según expresan tramitó ante la Cámara Contencioso Administrativa, Sala III).

En este contexto, en primer término, recordaremos que el artículo 123 de la Constitución Nacional, dispone que: *"Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero."*

Para luego, en segundo párrafo del artículo 124, agregar que: **"Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio."**

A su vez, la **Constitución de la Provincia de Córdoba**, en su artículo 11, establece que: **"El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales."** (lo remarcado es de mi autoría).

Añadiendo en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, que es la Provincia de Córdoba la que defiende los

recursos naturales, entre otras cosas, y **la protección del medio ambiente.**

Continuando con el análisis de la Constitución de la Provincia involucrada, en su Título Segundo "Municipalidades y Comunas", en el artículo 186, destinado a la competencia material de estos últimos, en el inciso 7, dispone que es función, atribución y finalidad inherente a la competencia municipal la protección del medio ambiente.

Dicho esto, no caben dudas, que si la actora intentara reclamar por daño ambiental (aunque sostiene que no es el caso de autos), no podría dirigir su acción contra el gobierno federal, toda vez que existe una patente responsabilidad, y consecuentemente un poder de policía en la materia, que le corresponde al Gobierno Municipal y a la Provincia de Córdoba, pero de ningún modo al Estado Nacional.

En ese orden de ideas, y a fin de desterrar por completo los dichos de la actora, no resulta menor recordar que, el artículo 41 de la Constitución Nacional, reza: *"Corresponde **a la Nación** dictar las normas que*

contengan los **presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.**" (lo remarcado me pertenece).

Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, la competencia en materia ambiental correspondía a los gobiernos locales (provinciales), por falta de delegación expresa en la Nación.

Con posterioridad, éste artículo (el 41 de la Constitución Nacional) ha tenido como finalidad la preservación del medio ambiente.

Es decir que, a partir de la mentada reforma, el Congreso de la Nación puede y debe dictar las leyes en materia ambiental, con presupuestos **MINIMOS** para todo el país, aunque su aplicación es local, es decir que les corresponde a las provincias. **La competencia sólo fue delegada a la Nación en lo referido a presupuestos mínimos de protección. Las provincias conservan sus atribuciones para complementarlas, e incluso extender esos principios, siempre en miras de proteger el medio ambiente.**

Ello, tiene como explicación lógica, que, si bien existen problemas que son comunes, cada región, de acuerdo a sus necesidades, requiere cuidado, protección y control específico para su área.

Así, jurisprudencialmente, se ha sostenido: *"la órbita de la distribución de competencias en la materia ambiental no ha variado en orden al reconocimiento de la potestad local para su regulación, siempre que se adecue a los "presupuestos mínimos de protección" que establezca la Nación"*.¹

En concordancia con la normativa analizada *ut supra*, el Congreso de la Nación dictó la Ley General de Ambiente (Ley 25.675), que según la actora ha sido vulnerada en el caso bajo análisis, que establece **los presupuestos mínimos** para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente.

De la propia jurisprudencia citada por la actora como aplicable en autos surge que las cuestiones propias del trámite y estudio del EIA así como la emisión de la

¹ Schroder Juan y Otro c/ E.N. -SRYNAH- y otro s/ amparo ley 16.986 Causa: 25.602/95. 28.11.96. CNCAF, Sala I.

DIA son competencia exclusiva de la jurisdicción local. (ver pág. 41 del escrito de inicio donde las citas refieren a procesos contra las autoridades locales).

Consecuentemente, no cabe sino concluir que existe una responsabilidad del gobierno local, ya sea provincial o municipal en la cuestión ambiental, y que no bastan los meros dichos de la contraria, para sostener una responsabilidad de mi mandante - Estado Nacional.

A mayor abundancia, debe advertirse que, como a la Nación le corresponde dictar los presupuestos mínimos y a las provincias, complementarlos y extenderlos, **la Legislatura de la Provincia de Córdoba dictó la Ley 10.208**, que en su artículo 1º, dice que: "*... complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional N° 25.675 -General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba*".

Y en su artículo 7, establece que la autoridad de aplicación de esa ley es el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (de la Provincia de Córdoba) o el organismo que en el futuro lo sustituyere.

Además, es tan evidente la responsabilidad de la provincia en materia ambiental, que como surge de su normativa vigente e incluso del sitio web oficial, han creado la "Dirección de Policía Ambiental"², e indican que ejercen **"el Control y Fiscalización en materia Hídrico - Ambiental, y de los Recursos Naturales en general, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba."**

Agregando que **"cumplimos y hacemos cumplir toda normativa que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del medio ambiente y de los recursos hídricos. (...) controlamos toda la actividad pública y/o privada que pueda afectar el equilibrio del medio ambiente, procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y/o alteración sobre el mismo y gestionando su inmediata remediación."** (lo remarcado es ajeno al original).

² <http://www.cba.gov.ar/policia-ambiental/quienes-somos/>

En síntesis, no existe ningún tipo de responsabilidad del Estado Nacional, en materia ambiental, tal como pretende argumentar la actora, con la sola finalidad de crear un fundamento a la demanda incoada, con la sola finalidad de reclamar una supuesta falta de habilitación por parte de mi mandante, que tampoco corresponde, conforme fuera explicado al inicio de este informe.

En virtud de todo lo expuesto, es que solicito a V.S., conforme su elevado criterio, el total rechazo de la pretensión amparista, con expresa imposición de costas.

3. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL.

A pesar de lo oscuro del relato de los actores, se puede inferir que - según ellos - la omisión de esta parte habría consistido en que pese a haber tomado conocimiento de la existencia de un "*conflicto ambiental*" por la planta de Porta Hermanos S.A. (por una nota emanada de ex Secretaría de Energía en el año 2015), no ha fiscalizado, controlado, o corroborado lo denunciado

por los vecinos, ni haber adoptado una medida administrativa rápida, urgente y eficaz que dispusiera el cese de la actividad legal, *"que en definitiva es lo que vienen a peticionar"* los actores (conforme exponen).

En los párrafos anteriores se ha puesto de manifiesto la improcedencia de la demanda contra mi mandante, por ausencia de responsabilidad del Estado Nacional, ya sea por la inexistencia de obligación legal de habilitar la planta de Porta Hermanos S.A., por no resultar una planta de bioetanol para uso combustible, sino también por no resultar - el Estado Nacional - competente en las cuestiones ambientales que mencionan los actores en su libelo de inicio, debiendo estos recurrir ante el gobierno municipal y/o provincial.

De todo lo expuesto hasta aquí, se deduce que **no existe conducta omisiva del Estado Nacional**, que lo hubiera obligado a disponer el cese de actividades de la planta en cuestión, y mucho menos que haya tenido competencias para intervenir en un supuesto daño ambiental. Negando desde ya, que hubiera tomado conocimiento del mismo en el año 2015.

Como si todo ello resultase insuficiente, a continuación se demostrará que el Estado Nacional no sólo no es sujeto pasible de responder por los hechos que le endilgan los actores no sólo por los motivos anteriormente expuestos, sino también porque en el *sub examine* no concurren los extremos para tener por acreditada la responsabilidad estatal.

Para la procedencia de declarar responsable al Estado por omisión, debe existir sí o sí una obligación objetiva de realizar una determinada acción o cumplir una determinada conducta, lo que en la especie resulta absolutamente descartado, por los fundamentos expuestos a lo largo de esta pieza procesal.

En el ámbito de la responsabilidad estatal y concretamente por omisión, ésta debe consistir en la omisión a un deber u obligación legal. La conducta omisiva debe surgir de un obrar antijurídico para ser resarcible.

Ya el maestro Marienhoff sostenía que "*...la responsabilidad extracontractual del estado por las consecuencias de sus hechos o actos de omisión,*

producidos en el ámbito del derecho público, se rige, por principio, por la disposición genérica del art. 1074 del Código Civil..." y agrega que "**tratándose de responsabilidad por omisión, lo primero que se deberá acreditar es la existencia de tal omisión y el razonable deber jurídico del Estado de haber incumplido el hecho o acto omitido**, tal como lo requiere el art. 1074 del Código Civil..."³ (el resaltado me pertenece)

Ahora bien los factores de atribución de esa responsabilidad por omisión del Estado, deben configurar para resultar procedente cuatro elementos: **antijuridicidad; daño o perjuicio**, el cual deberá ser cierto, posible, individualizado, no eventual, que exceda la carga común de un ciudadano o requiera un sacrificio especial del reclamante; **imputabilidad material**, imputabilidad objetiva y relación de causalidad entre el hecho o acto omisivo y el daño causado al particular.

³Marienhoff, Miguel-"Responsabilidad extracontractual de Estado por las consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del derecho público", E.D., 169- 1093 a 1110.

Estos requisitos deben concurrir en su totalidad, con lo cual la ausencia de prueba concreta respecto a alguno de ellos invalida la pretensión amparista.

El Más Alto Tribunal, en más de una oportunidad, se ha pronunciado sobre los requisitos que deben estar presentes para poder achacar responsabilidad a mi poderdante.

A partir del citado fallo, la C.S.J.N. estableció los presupuestos de la responsabilidad del Estado Nacional, a saber: 1) lesión resarcible, 2) que el hecho sea imputable al Estado, 3) relación de causalidad entre el hecho y el daño.

El Máximo Tribunal Nacional ha dejado sentado que para que la responsabilidad del Estado sea procedente, la acción por la que se la intenta no puede adolecer de carencias tales como determinar de manera fehaciente la relación de causalidad jurídicamente relevante.

En dicho entendimiento, en un trabajo publicado por el Dr. Pablo Esteban Perrino titulado "*La Responsabilidad de la Administración por su actividad ilícita*"⁴, se

⁴ (Revista jurídica EL DERECHO, 28-12-99)

estableció que: "En general la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Federal coinciden en señalar que los presupuestos para que se torne viable la responsabilidad estatal son cuatro:

a) Daño o perjuicio;

b) Relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar estatal y el perjuicio;

c) Posibilidad de imputar jurídicamente los daños a la persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que lo ocasionó y

d) La existencia de una falta de servicio.

El primero de los requisitos que debe verificarse para la viabilidad de la responsabilidad estatal es la existencia de un daño o perjuicio injusto. Sin daño no se genera el deber de reparar. El daño constituye un elemento capital para la existencia de la responsabilidad.

El autor material del hecho dañoso debe estar integrado a la estructura de la Administración, bien sea en su condición de autoridad, empleado en régimen

administrativo o laboral, contrato o que realice una gestión de facto."

Todo ello, ha sido recepcionado por la **Ley 26.944**.

En síntesis, hasta el dictado de la citada ley no existía una norma específica sobre la responsabilidad estatal, no obstante, ya existía doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha ido estableciendo los requisitos para que proceda la responsabilidad Estatal.

Con la sanción de la Ley 26.944, se reguló sobre la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas, es decir cuando la Administración incurre en omisión a sus deberes.

La señalada Ley, en su artículo 3° establece como requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e **inactividad** e ilegítima:

"a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;

c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue;

d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado."

De esta manera, en autos, no hay construcción jurídica alguna sobre los atributos de la responsabilidad estatal que pueda prosperar.

Para que nazca la responsabilidad del Estado es necesario que se acredite una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la omisión antijurídica que se atribuye al Estado y el perjuicio.

Nada de ello ocurre en autos. No sólo los actores no acreditan daño alguno, sino que lo que solicitan es el cierre de la Planta de Porta Hermanos S.A., por carecer de una presunta habilitación legal, pero según sostienen, no reclaman por el daño ambiental que invocan, y que obviamente no prueban.

Así, Tawil considera que la responsabilidad estatal exige la acreditación de una relación de causalidad *directa, inmediata y exclusiva* entre la conducta cuestionada y el perjuicio reparable. Afirma que el nexo causal entre la acción u omisión administrativa y la lesión requiere que no se interfiera el acto de un tercero o la propia conducta del lesionado.⁵

Lo que se procura poner de relieve aquí es que la contraria no ha hecho un acabado análisis acerca de la procedencia de los factores de atribución de mi mandante.

No puede dejar de advertirse que, los actores pretenden endilgarle responsabilidad al Estado Nacional, por una supuesta nota cursada por la entonces Secretaría de Energía, en el año 2015, por la que según consideran, tomó conocimiento fehaciente "*de que al menos ya existía un conflicto relación a un impacto ambiental derivado de una planta de bioetanol (...) sin embargo no adoptó ninguna medida en orden a controlar, fiscalizar y corroborar lo denunciado por los vecinos...*"

⁵ (Tawil, Guido Santiago, "Omisión, Guerra y Responsabilidad del Estado", LL, 1991-D-362).

Como ya expusimos, no existe en cabeza del Estado Nacional un deber de control y fiscalización sobre la Planta de Bioetanol, ya que su actividad no se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Energía y Minería, y tampoco tiene competencias en la cuestión ambiental que denuncian - y no acreditan - toda vez que, en ese caso deberá intervenir la Dirección de Policía Ambiental, o la autoridad correspondiente en el ámbito provincial, o bien las autoridades del gobierno municipal.

En esa dirección, no sólo no acreditó el daño, sino que no existe el nexo de causalidad que debe concurrir entre el daño y la inacción estatal.

En esa línea es abundante la jurisprudencia: *"Para que exista el deber de reparar del Estado es requisito que medie vínculo causal entre el daño y la conducta estatal y el nexo causal se verifica cuando el perjuicio puede ser objetivamente atribuido a la acción u omisión de un órgano o sujeto estatal."*⁶

Como se puede observar, la ausencia de toda construcción jurídica sobre la imputación de

⁶ "Maderera Panamericana SACEI c/E.N. -M° de Defensa- Gendarmería Nacional s/proceso de conocimiento". Expte. 17162/1995. Fallo 03.06.08. CNCAF, Sala II.

responsabilidad al Estado Nacional hace que la pretensión enderezada contra mi representada no tenga otro camino que la desestimación, lo que así se solicita de V.S.

V. RAZONES QUE TORNAN JURÍDICAMENTE INADMISIBLE LA ACCION DE AMPARO. AUSENCIA DE REQUISITOS FORMALES.

En primer lugar, es menester poner de resalto que la acción intentada resulta inadmisibile en atención a las prescripciones de la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia aplicables.

Del escrito de inicio se desprende que la petición de los vecinos amparistas no cumple ni acredita los requisitos necesarios para instar esta particular acción judicial. En efecto, la excepcionalidad del amparo exige el acabado cumplimiento de los presupuestos de viabilidad, lo que, claramente, no ocurre en autos.

A los fines de conservar un orden metodológico, seguidamente se desarrollarán las causas que tornan formalmente inadmisibile el remedio intentado por la actora.

1. Inexistencia de lesión manifiestamente arbitraria e ilegal de derechos y garantías constitucionales.

El amparo es un proceso urgente que brinda respuesta procesal frente a un acto, hecho u omisión de la autoridad estatal que lesiona o amenaza con inminencia o en forma actual un derecho reconocido por la Constitución Nacional, un tratado o una ley.

El artículo 43 de la Constitución Nacional, en el que fundamentan la acción de amparo, **refiere al acto u omisión de autoridades públicas** o de particulares, **que en forma actual o inminente lesione**, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidas en la Constitución Nacional, un tratado o una ley puede ser impugnado a través del amparo.

A la inexistencia de responsabilidad por omisión del Estado Nacional, ya nos hemos referido.

Ahora bien, aquí, los accionantes, intentan fundar el requisito de "lesión actual e inminente", exponiendo que *"las actividades de destilería de los alcoholes (bioetanol) que se desarrollan en la Planta de la Empresa*

PORTA HNOS S.A., que se vienen llevando a cabo desde el mes de febrero de 2012, han contaminado el aire y el ambiente en general...”

Como podrá advertir V.S., ello, no acredita en modo alguno la lesión que pretende crear.

De las constancias de autos, es dable inferir que el daño o lesión invocada no se subsume en el concepto jurídico de “inminencia”. Ciertamente el amparo constitucional no ha sido consagrado para tutelar daños meramente conjeturales o imaginarios.

En efecto, para que pueda conferirse la tutela judicial inmediata por conducto del amparo es requisito indispensable acreditar una situación de “urgencia”. Ésta, a su vez, remite a la idea de daño cierto, concreto, grave e irreparable que en forma actual o inminente afectaría los derechos enumerados en el art. 43 de la Constitución Nacional, si éstos no fueran restablecidos prontamente.

Dicha circunstancia logra por sí sola el rechazo de esta acción.

El daño provocado por un acto, un hecho, una omisión

o una amenaza debe ser real, efectivo, tangible y no hipotético⁷.

Al respecto, Sagüés destaca que: *"...el perjuicio que atiende la ley 16.986 debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Se excluyen, pues, del amparo, los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. El daño que se pretende reparar será, por tanto, cierto"*.⁸

Sostienen incasablemente la supuesta existencia de daño ambiental y a su salud, sin acreditar ello de modo alguno, pretenden hacerlo con una serie de citas y un extenso y confuso relato sobre el Bioetanol, pero en concreto, **nada refieren respecto del supuesto daño inminente que habilite la acción rápida y expedita de amparo.**

Como sostienen en su demanda, su acción está destinada a solicitar la clausura y cierre definitivo, por carecer de habilitación legal de la planta de Porta Hermanos S.A., **y para ello pretenden crear como "lesión", la existencia de daño ambiental,** al que - según sus

⁷ LAZZARINI, J. L., *"El Juicio de Amparo"*, Buenos Aires, La Ley, 2° ed., 1988, pág. 241.

⁸ SAGÜÉS, Néstor P., *"Acción de Amparo"*, Buenos Aires, Astrea, 1988, T. 3, pág. 106.

propios dichos - sólo manifiestan "de manera subsidiaria".

En efecto, como ya se expuso, no sólo es errónea la interpretación de la actora respecto de la habilitación a la que refiere, sino que no han logrado acreditar el daño y la inminencia del mismo.

Nótese que, como prueba, han ofrecido un solo certificado médico (desconocido por esta parte), siendo más de 35 actores, y no han ofrecido prueba pericial alguna.

Consiguientemente, la ausencia de daño en el caso determina sin más la inadmisibilidad de la acción, cuya declaración solicito a V.S.

2. Inexistencia de "caso judicial".

El artículo 116 de la Constitución Nacional concretamente establece que los tribunales actúan en causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución o las leyes del Congreso.

Asimismo, la ley 27, en su artículo 2º, dispone que la justicia federal solamente puede ser ejercida en los

casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. En ese sentido, se ha dicho que es de la esencia del Poder Judicial resolver colisiones de derechos.

La comprobación de que existe un "caso", constituye un recaudo básico e ineludible, de neta raigambre constitucional, que reconoce su origen en la división de poderes. Se ha dicho al respecto que: *"Ningún principio es más fundamental para el cumplimiento del adecuado rol de la judicatura en nuestro sistema de gobierno que la limitación constitucional de la jurisdicción de los tribunales federales a concretos casos o controversias"*.

Así, el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio -la afectación de un interés jurídicamente protegido-, de orden "personal, particularizado, concreto y además, susceptible de tratamiento judicial", recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros dos poderes del

Estado.⁹

No habiéndose comprobado la existencia de un perjuicio real y concreto de los accionantes, puede confiadamente concluirse que no existe, en el supuesto de autos, "caso judicial" o "causa" que habilite la intervención de la justicia.

Los actores pretenden crear el "caso judicial" señalando que existe contaminación ambiental, y que la misma es provocada por una planta de bioetanol, que funciona sin habilitación, pero su objetivo es sólo el cese de la actividad de la planta, por la supuesta falta de habilitación. **Es decir, que utiliza el argumento de daño al medio ambiente, con la única finalidad, de utilizar la vía del amparo y de crear el "caso judicial".**

En esa dirección resulta necesario destacar, tal como se expuso a lo largo del presente informe, la planta cuyo cierre solicitan, no requiere la habilitación legal que indican, toda vez que el control de su actividad no se encuentra bajo la órbita de mi mandante.

Consecuentemente, los actores no demuestran sufrir

⁹ ("Raines v. Byrd", 117 S. Ct. 2312, pág. 2317; sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, del 26 de junio de 1997, se cita aún en la colección oficial de fallos de ese tribunal).

agravio alguno, tampoco demuestran que exista, o pueda existir, un menoscabo o perjuicio sobre un derecho individual o de incidencia colectiva.

Adviértase que no intentan probar de modo alguno, los daños que dicen padecer.

En virtud de lo expuesto y de las consideraciones que se efectuarán seguidamente, surge claro que la presente acción carece de sustento fáctico y jurídico y por lo tanto, debe ser rechazada en su totalidad.

3. La cuestión sometida a análisis exige una mayor amplitud de debate y prueba.

El amparo solicitado es formalmente improcedente.

En la presente acción, en la cual básicamente los actores discuten, según sus propios dichos, *"las actividades que desarrolla la Planta de Bioetanol (...), y el encuadramiento o no, de su actividad a las leyes vigentes en el orden nacional (...) la existencia o no de la correspondiente "habilitación previa"*.

Sin embargo, para fundamentar su pretensión, encuadran la presente acción dentro de un "amparo

ambiental", argumentando la existencia de un daño al medio ambiente y a su salud, y una responsabilidad estatal por omisión. Claro que todo ello sin cimiento sólido alguno.

Evidentemente todo ello, no puede ser debatido, probado, ni resuelto en el estrecho conocimiento del amparo.

Existen cuestiones cuya complejidad técnica, necesidad de producción de prueba, necesidad de un debate amplio entre las diversas partes, naturalmente requieren ser encauzadas en un proceso judicial de conocimiento, dando oportunidad de amplia defensa a las partes involucradas.

El Máximo Tribunal, en un caso en el que se cuestionaba la contaminación ambiental por un conflicto de aguas entre provincias, sostuvo: ***"Que el trámite que ha de imprimirse a la acción entablada no puede ser el del amparo, pues las medidas probatorias que deberán llevarse a cabo exigen un marco procesal de conocimiento más amplio, de modo que resulta adecuada la aplicación***

del régimen ordinario (conf. Fallos:331:1243 ya citado) ”¹⁰
(el resaltado me pertenece).

En el caso, los amparistas deberán probar que derechos afecta y de qué manera lo hace, por la vía que corresponda, que no es el amparo toda vez que requiere de un proceso más extenso, conforme lo expuesto.

En el presente, las cuestiones son hartamente complejas, tanto en su calificación jurídica como en las pruebas que deberían realizarse para descubrir y conocer todos los hechos relevantes.

Ratificando la improcedencia de la vía del amparo, la petición efectuada por el actor excede el marco cognoscitivo de la acción de amparo.

Al no reunir la presente acción los requisitos formales de procedencia, ésta debe ser rechazada. Más aún, debió estarse al rechazó *in limine* (tal como fuera dispuesto por el titular del Juzgado Federal N°1).

¹⁰ PALAZZANI, MIGUEL ANGEL c/ MENDOZA, PROVINCIA DE Y OTRO s/AMPARO AMBIENTAL (Expte. CSJN 732/2010)

VI. CONCLUSIÓN.

Es preciso afirmar que los argumentos expuestos en la pieza de inicio, en modo alguno satisfacen - ni en mínima medida- los recaudos formales desarrollados precedentemente, pues es obvio que las articulaciones no son sino argumentos de orden subjetivo, genéricos e insustanciales a los fines de acreditar la viabilidad de una acción que resulta a todas luces improcedente.

Los amparistas solo mencionan genéricamente una supuesta afectación a derechos constitucionales, sin que existan argumentos concretos que indiquen de qué manera se produciría el agravio denunciado.

Por su parte, la supuesta ausencia de habilitación en la que fundamentan toda su demanda, carece de sustento normativo toda vez que no se trata de bioetanol para uso combustible, tal como fue desarrollado *ut infra*.

No existe ningún tipo de responsabilidad del Estado Nacional por omisión, y menos aún responsabilidad en el daño ambiental cuya existencia invocan, y que no han probado.

No resulta menor destacar que, en reiteradas oportunidades, los amparistas sostienen que ese no es el objeto de su demanda.

Es por todo ello que mi mandante solicita se rechace el planteo efectuado por los vecinos actores, tanto por los defectos formales del planteo como por la improcedencia sustancial de la pretensión actora.

Todo ello, ha sido recepcionado por la **Ley 26.944**.

En síntesis los dos argumentos que traen los amparistas para demandar a mi parte: ausencia de habilitación de la planta para funcionar y falta de intervención en el trámite y aprobación del EIA (Evaluación de impacto ambiental) y la consecuente DIA (Declaración de Impacto ambiental), pretendiendo demostrar una responsabilidad por omisión en el cumplimiento de obligaciones ha quedado desvirtuado por cuanto la producción de la planta no trata de productos combustibles sino alimenticios para lo cual la normativa vigente (citada por los propios accionantes) y aplicable no prevé intervención alguna del Ministerio de Energía y Minería ni la obligación de habilitación previa para

funcionar de la planta. Por otro lado el trámite del EIA se realiza, tal como lo pone de manifiesto la propia parte accionante en sede de las autoridades locales, por tratarse de competencias de dichas jurisdicciones (ya sean municipales o provinciales).

Por ende tampoco corresponde a mi mandante la realización de audiencia pública para la participación ciudadana previa a la DIA.

Es decir que los incumplimientos u omisiones base de la pretensión no se encuentran a cargo de mi representada.

VII. OFRECE PRUEBA.

Como prueba que hace al derecho de mi parte, a V.S. solicito:

a) Se ordene librar oficio a la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a fin de que tenga a bien informar a que jurisdicción corresponde el control y

fiscalización en materia ambiental, con relación al caso de autos.

b) Se ordene librar oficio a:

- Al Instituto Nacional de Vitivinicultura;
- A la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT);
- A la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria (Ministerio de Industria, Comercio y Minería, de la Provincia de Córdoba);
- A la Municipalidad de Córdoba;

A todos ellos a fin de solicitarle informen si consta en sus registros inscripción o habilitación a nombre de empresa Porta Hermanos S.A., y en su caso, con qué alcance se expidió la misma, o para la actividad dentro de qué rubro.

c) Se ordene librar oficio al Registro Nacional de Precursores Químicos (Ministerio de Seguridad de la Nación), a fin de que informe con que sustancias se encuentra autorizada a operar la empresa Porta Hermanos S.A.

d) Se ordene librar oficio a la Municipalidad de Córdoba, a fin de que informe si la empresa Porta Hermanos S.A. realizó algún tipo de presentación relacionada con el EIA para la obtención de la DIA, y en su caso cual es el estado del trámite de la misma.

VIII. SOLICITA CITACIÓN COMO TERCERO.

De conformidad con lo expuesto en esta pieza procesal, y en atención a la responsabilidad de las autoridades locales, solicito se cite como tercero al Municipio de Córdoba, de acuerdo a lo establecido por el Código de Procedimiento.

IX. PLANTEO DEL CASO FEDERAL.

Para el hipotético e improbable supuesto que V.S. admitiera la pretensión actora, planteamos el caso federal previsto en el artículo 14 de la Ley N° 48, por encontrarse controvertida la interpretación y el alcance de derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional.

Por otra parte, se configuraría una situación de manifiesta arbitrariedad y "gravedad institucional"

conforme con la doctrina la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X. PETITORIO.

Por todo lo expuesto precedentemente, de V.S. respetuosamente solicito:

1) Tenga por producido, en legal tiempo y forma, el informe establecido por el artículo 8° de la Ley N° 16.986.

2) Se tenga presente el planteo del caso federal formulado.

3) Se provea la prueba ofrecida.

4) Se rechace la acción intentada, con expresa imposición de costas a la parte actora.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.